

RESOLUCIÓN No. 054 de 2019

(30 de abril de 2019)

"Por medio de la cual se declara la prescripción de la acción de cobro administrativo coactivo respecto de la obligación a cargo de RICARDO BARÓN MONROY identificado con cedula de ciudadanía No. 7.162.624 y se declara la terminación del proceso No. 2012-071"

LA FUNCIONARIA EJECUTORA DE LA REGIONAL BOYACÁ DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"

En uso de las facultades conferidas por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, artículo 98 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el libro V título VIII del Estatuto Tributario, la Resolución 384 del 11 de febrero de 2008 emanada de la Dirección General del ICBF, la Resolución 2934 del 2009 y la Resolución 2278 de 11 de octubre de 2017 mediante la cual se designa como funcionario ejecutor de la Regional Boyacá a un servidor público y, de acuerdo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Que el Juzgado Segundo de Familia de Tunja, mediante sentencia de fecha 08 de agosto de 2008, ordenó al señor RICARDO BARÓN MONROY identificado con cedula de ciudadanía No. 7.162.624, reembolsar los gastos en que incurrió el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR al practicar la prueba de ADN ordenada en el proceso de investigación de paternidad No. 2007-0317¹.

Que previo cumplimiento de los respectivos formalismos, se avocó conocimiento mediante Auto de fecha 12 de septiembre de 2012².

Que se libró mandamiento de pago contra RICARDO BARÓN MONROY mediante Resolución No. 92 de fecha 12 de septiembre de 2012 por la suma de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$417.780) M/CTE correspondiente al capital y adicionalmente por los intereses moratorios³.

Que el mandamiento de pago fue notificado por aviso al deudor en el diario el Nuevo Siglo el dia 31 de diciembre de 2013⁴.

Que el día 13 de mayo de 2014, se realizó consulta en CIFIN⁵.

Que mediante oficio radicado bajo el No. 00010356 de fecha 13 de mayo de 2014, se solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, información referente a si el deudor se encontraba registrado como propietario de bienes inmuebles, sin que repose en el expediente información alguna⁶.

Que mediante oficio radicado bajo el No. 00017494 de fecha 19 de mayo de 2014, se solicitó al Instituto de Tránsito de Boyacá, información referente a si el deudor se encontraba registrado como propietario de vehículos automotores, sin que arrojará información alguna⁷.

¹ Folios 1 a 5

² Fölio 9

³ Folio 11

⁴ Folio 16

⁵ Folios 17 a 18

⁶ Folio 19 ⁷ Folios 20 a 21





Que mediante Auto No. 006 de fecha 24 de julio de 2015, se ordenó investigación de bienes a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Instituto de Tránsito de Boyacá y CIFIN⁸.

Que mediante oficio radicado bajo el No. S-2015-322154-1500 de fecha 20 de agosto de 2015, se solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, información referente a si el deudor se encontraba registrado como propietario de bienes inmuebles, sin que repose en el expediente certificado de libertad y tradición del deudor⁹.

Que mediante Resolución No. 044 de fecha 23 de octubre de 2015, se dictó sentencia ordenando seguir adelante la ejecución contra RICARDO BARÓN MONROY por la suma de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$417.780) M/CTE de capital, más los intereses moratorios y las costas procesales que se ocasionaran¹⁰.

Que el día 26 de mayo de 2016 se realizó consulta en CIFIN. Búsqueda que arrojó una cuenta bancaria del deudor en estado normal¹¹.

Que mediante Auto No. 005 de fecha 17 de noviembre de 2016, se ordenó investigación de bienes a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Instituto de Tránsito de Boyacá, y CIFIN y se libraron los respectivos oficios a las entidades referenciadas¹².

Que el día 22 de noviembre de 2016 se realizó consulta en CIFIN. Búsqueda que arrojó una cuenta bancaria del deudor en estado normal¹³.

Que reposa en el expediente certificado de cancelación de matrícula de persona natural del señor BARON MONROY RICARDO con matrícula mercantil No. 0005442614.

Reposa un DVD con 138 folios correspondiente a los oficios librados producto de la investigación de bienes ordenada con Auto No. 005 de 2016, sin evidenciar bienes de propiedad del deudor¹⁵.

Que reposa en el expediente sentencia de 08 de agosto de 2008 proferida con el Juzgado Segundo de Familia de Tunja con constancia de ejecutoria de 22 de agosto de 2008¹⁶.

Que mediante Auto No. 064 de fecha 23 de marzo de 2018, se ordenó investigación de bienes a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Instituto de Tránsito de Boyacá, y CIFIN¹⁷.

Que se realizó consulta en RUES – Registro único empresarial y social cámaras de comerciosobre información de registro mercantil en las cámaras de comercio del deudor, arrojando que la matrícula mercantil No. 0000054426 fue cancelada¹⁸.

Que con ofició radicado bajo el número S-2018-236880-1500 de 30 de abril de 2018, se ofició al Instituto de Tránsito de Boyacá para que informara si el deudor se encontraba inscrito como propietario de vehículos automotores. 19. Y con oficio con radicado interno No. E-2018-242671-

⁶ Folio 22

⁹ Folios 24 a 27

¹⁰ Folios 29 a 30

¹¹ Folio 33

¹² Folio 34

¹³ Folio 35

¹³ Folio 35 ¹⁴ Folios 36 a 39

¹⁵ Folio 40

¹⁶ Folios 44 a 47

¹⁷ Folio 48

¹⁸ Folio 50

¹⁹ Folios 51 a 52



1500 de 10 de mayo de 2018, la citada entidad informo que el deudor no registraba en sus bases de datos como propietario de vehículos²⁰.

Que el día 25 de octubre de 2018, se realizó consulta en CIFIN21.

Que mediante Auto No. 309 de fecha 28 de diciembre de 2018, se ordenó investigación de bienes a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Instituto de Tránsito de Boyacá, y CIFIN²².

Que el día 31 de enero de 2019 se realizó consulta en CIFIN. Búsqueda que arrojó una cuenta bancaria del deudor en estado normal²³.

Que con oficio radicado bajo el número S-2019-050543-1500 de 31 de enero de 2019, se ofició al instituto de Tránsito de Boyacá para que informara si el deudor se encontraba inscrito como propietario de vehículos automotores, sin que repose en el expediente información de bienes de propiedad del deudor²⁴.

Que se realizó consulta en RUES – Registro único empresarial y social cámaras de comerciosobre información de registro mercantil en las cámaras de comercio del deudor, arrojando que la matrícula mercantil No. 0000054426 fue cancelada²⁵.

Que reposa en el expediente certificación proferida por el Coordinador del Grupo Financiero, donde se informó el valor de la deuda, a 30 de abril de 2019, ascendía a la suma de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$417.780) M/CTE por concepto de capital²⁶.

CONSIDERANDO

Que la Ley 1066 de 2006 "por la cual se dictan Normas para la normalización de la cartera publica y se dictan otras disposiciones" en su artículo 5, establece la facultad de cobro coactivo de las entidades públicas e indica que el procedimiento de cobro coactivo será el contemplado en el Estatuto Tributario.

Que el artículo 828 del Estatuto Tributario y el 99 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establecen los títulos que prestan mérito ejecutivo a favor de la administración.

Que la prescripción constituye una de las formas de extinción de las obligaciones por el paso del tiempo sin que se haya logrado el pago de la acreencia. Sin embargo, la Corte Constitucional en Sentencia C 895 de 2009 la ha definido en los siguientes términos: "La prescripción extintiva o liberatoria es la institución jurídica por medio de la cual se pone fin a un derecho y a la correspondiente obligación, como consecuencia del paso del tiempo y de la pasividad de su titular en exigirlo por los cauces previstos en el ordenamiento, y halla sustento en los principios de seguridad jurídica, orden público y paz social."

Que el Consejo de Estado²⁷ indicó: "la Sala considera que cuando los servidores públicos encargados de las funciones de cobro coactivo estén en presencia de obligaciones cuya fuente

²⁰ Folio 53

²¹ Folio 54

²² Folio 55

²³ Folio 57

²⁴ Folios 58 a 59

²⁵ Folio 60

²⁶ Folio 62

²⁷ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente Gustavo Aponte Santos. Sentencia de 19 de junio de 2008, Rad. 11001-03-06-000-2008-00040-00(1904)





sea un acto administrativo, están en el deber legal de analizar si ese acto ha perdido fuerza ejecutoria, como se explicó en extenso en el concepto No. 1552 de 2004 (...). En los demás casos, es decir, en aquellos en que la obligación esté contenida en otro tipo de documentos, por ejemplo, en aquellos que provengan del deudor, la viabilidad de iniciar el proceso de cobro coactivo dependerá de la ocurrencia o no de la figura de la prescripción extintiva del derecho, ²⁸prevista en el Código Civil y, cuando así lo prevea el legislador, como en el caso, de la prescripción de obligaciones de origen tributario".

A su vez en sentencia de 02 de Julio de 201529 estableció: "en relación con la prescripción de la acción de cobro, la Sala reitera que de la lectura de los artículos 817 y 818 del E. T. se desprende que la obligación de la administración no solo es iniciar la acción de cobra coactivo dentro de los cinco años siguientes a que la obligación se hizo exigible, sino que, una vez iniciada, debe culminarla en ese término, so pena de que los actos que expida después de expirado el término queden viciados por falta de competencia temporal, pues « ... detrás del término de prescripción de la acción de cobro coactivo hay poderosas razones de seguridad jurídica tanto para la administración como para los contribuyentes. Para la administración porque debe existir siempre un momento definitivo en el que se consoliden los actos administrativos que expide en el procedimiento de cobro coactivo. Y para los contribuyentes, porque la acción de cobro no puede extenderse indefinidamente en el tiempo» ".

Que el Código Civil en el Título XIV y Capítulo III al regular el modo de extinguir las obligaciones, consagra en sus artículos 1625 y 2535 la figura de la prescripción, la cual se genera por un lapso de tiempo sin que se hayan realizado acciones. Y el artículo 2536 indica que la acción ejecutiva se prescribe por cinco años y la ordinaria por diez.

Que según la Resolución 384 de 2008 "por la cual se adopta el reglamento interno de recaudo de cartera" concordante con la Resolución 2934 de 2009 "por la cual se expide el Manual de Cobro Administrativo Coactivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar", el proceso administrativo por jurisdicción coactiva se podrá dar por terminado y en consecuencia se archivará el expediente cuando se advierta que procede la prescripción de la obligación.

Que el Estatuto Tributario, en su artículo 817 determina que la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de que se hicieron legalmente exigibles,

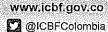
Que la Resolución 384 de 2008, en su artículo 58 establece la competencia que tiene el Funcionario Ejecutor para ordenar la prescripción de oficio de las obligaciones que se encuentren en etapa de cobro coactivo, concordante con el inciso del artículo 817 Estatuto Tributario Nacional reglamentado por el Decreto Nacional 2452 de 2015.

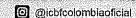
Que el artículo 8 de la Ley 791 de 2002 modificó el artículo 2536 del Código Civil, estableciendo la prescripción en cinco (5) años, norma que estuvo vigente del 28 de diciembre de 2002 hasta el 28 de julio de 2006.

Que atendiendo a lo establecido en el artículo 818 ibídem y artículo 57 de la Resolución 384 de 2008, el término de prescripción se interrumpe, en los siguientes casos: "1. Por la notificación del mandamiento de pago (...). A su vez, este artículo preceptúa que, interrumpida la prescripción por la notificación del mandamiento de pago, el término se contabiliza de nuevo a partir del día siguiente de su ocurrencia.

BARCENAS. Sentencia de 02 de julio de 2015, Rad. 00243 (19500)







²⁸ Código Civil. "Artículo. 2512.- La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

[&]quot;Artículo, 2535.- La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejércido dichas acciones."

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente HUGO FERNANDO BASTIDAS





Aplicados estos derroteros en la especie objeto de estudio se tiene que el término de prescripción de la acción de cobro no fue interrumpido con la notificación del mandamiento de pago. Lo anterior, toda vez que la obligación se hizo exigible el 22 de agosto de 2008³0 y la notificación del mandamiento de pago fue realizada por aviso en prensa hasta el día 31 de diciembre de 2013³1.

En consecuencia, y pese a las acciones realizadas entendidas éstas como investigaciones de bienes, citaciones y demás actuaciones orientadas el impulso procesal del proceso ibidem, acciones que se evidencian dentro del expediente, a la fecha en que se notificó la Resolución No. 92 de 2012, ya había transcurrido más de cinco (05) años desde la exigibilidad de la obligación objeto de ejecución, por lo se encuentra prescrita desde el 22 de agosto de 2013, sin que se hubiera logrado un cobro efectivo total de la obligación. Por lo que no era posible decretar medidas cautelares sobre los bienes identificados del 2012 en adelante, atendiendo que ya se había perdido competencia temporal para actuar.

Que de conformidad con certificación de 30 de abril de 2019, proferida por el Grupo Financiero de la Regional Boyacá, se indicó que el señor RICARDO BARÓN MONROY a la fecha adeuda la suma de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$417.780) M/CTE por concepto de capital.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la PRESCRIPCIÓN de la acción de cobro dentro del proceso administrativo de cobro coactivo adelantado contra RICARDO BARÓN MONROY identificado con cedula de ciudadanía No. 7.162.624, por la obligación contenida en la sentencia de fecha 08 de agosto de 2008 proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Tunja, que a la fecha asciende a la suma de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$417.780) M/CTE por concepto de capital, más los intereses moratorios que se hayan causado a la tasa del 12% anual de conformidad con la normatividad vigente (ley 68 de 1923 artículo 9) y dejados de cancelar.

SEGUNDO: En consecuencia, DAR POR TERMINADO el proceso administrativo de cobro coactivo número 2012-071 que se adelanta en contra de RICARDO BARÓN MONROY identificado con cedula de ciudadanía No. 7.162.624.

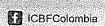
TERCERO: LEVANTAR las medidas cautelares ordenadas dentro del proceso, para el efecto líbrense los oficios correspondientes.

CUARTO: NOTIFICAR al deudor de la decisión acogida en la presente resolución, haciéndole saber que en contra la misma no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto por el artículo 833-1 del Esfatuto Tributario.

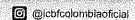
QUINTO: COMUNICAR la presente Resolución al Grupo Financiero de la Regional Boyacá para que proceda con la cancelación del registro contable correspondiente.

SEXTO: REMITIR copia de la presente Resolución a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia.

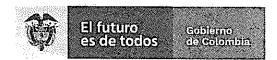
³⁰ Afirmación que se realiza conforme a constancia de ejecutoria de 22 de agosto de 2008 que obra a folio 47 del expediente ³¹ Folio 16











SÉPTIMO: ARCHIVAR el expediente y háganse las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Tunja, a los treinta (30) días del mes de abril de 2019

SANDRA MILENA BERNAL PINILLA

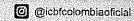
Funcionaria Ejecutora

Aprobó: Sandra Milena Bernal Pinilla Revisó: Sandra Milena Bernal Pinilla

Proyectó: Sandra Milena Bernal Pinila

IGBFColombia

www.icbf.gov.co





3rupo Jurídico



DESTINATARIO

Devantuments by 4514

ICBF-Cecilia de La Fuente de Lleras Al contestar cite No.: S-2019-247695-1500 Fecha: 2019-05-06 08:40:32

Enviar a: RICARDO BARON MONROY

No. Folios: 3

RDO BARÓN MONROY 10 A No. 5-117

Respetado señor:

De manera atenta, me permito comunicar que mediante Resolución No. 054 de 30 de abril de 2019, de la cual remito copia, este despacho de Jurisdicción Coactiva declaró la Prescripción de la acción de cobro administrativo coactivo respecto de la obligación a su cargo y se declaró la terminación del proceso 2012-071.

Así mismo, le informo que contra el citado acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 833-1 del Estatuto Tributario.

Cordialmente,

SANDRA MILENA BERNAL

Funcionaria Ejecutora Regional Boyacá

Anexo: tres (03) folios

Aprobó: Sandra Milena Bernal Pinilla Reviso: Sandra Milena Bernal Pinilla Proyectó: Sandra Milena Bernal Pinilla

ICBFColombia

www.icbf.gov.co

@ICBFColombia

@icbfcolombiaoficial

Tunja, carrera 6 No. 73-98 Teléfono: 7473716

Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080

